

2024

ANUARIO
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE



10 años
nodal

ÍNDICE

01

EDITORIAL

05

INTRODUCCIÓN

11

PANORAMA REGIONAL: LOS
ACTORES DE LA DISPUTA

72

ELECCIONES EN LA REGIÓN: (DES)
EQUILIBRIO DE FUERZAS
GEOPOLÍTICAS

123

EL MUNDO DEL TRABAJO EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRE
LA INFORMALIDAD Y LA ECONOMÍA
DE PLATAFORMAS

134

PROTESTAS: LAS CALLES Y LAS REDES
COMO ESCENARIO DE DISPUTA

153

GÉNERO: ESTAMOS ACÁ

164

LA REGIÓN EN LLAMAS: PÉRDIDA DE
LA BIODIVERSIDAD

175

PRODUCCIÓN AGRARIA:
LATINOAMÉRICA HACIA UNA NUEVA
FASE DEL SISTEMA PRODUCTIVO

190

REFLEXIONES FINALES



ELECCIONES EN LA REGION: (DES) EQUILIBRIO DE FUERZAS GEOPOLÍTICAS

CAMINO A LAS URNAS PRESIDENCIALES EN 2025

ECUADOR:

SE LANZA LA CARRERA ELECTORAL EN UN CLIMA SOCIAL CONVULSIONADO

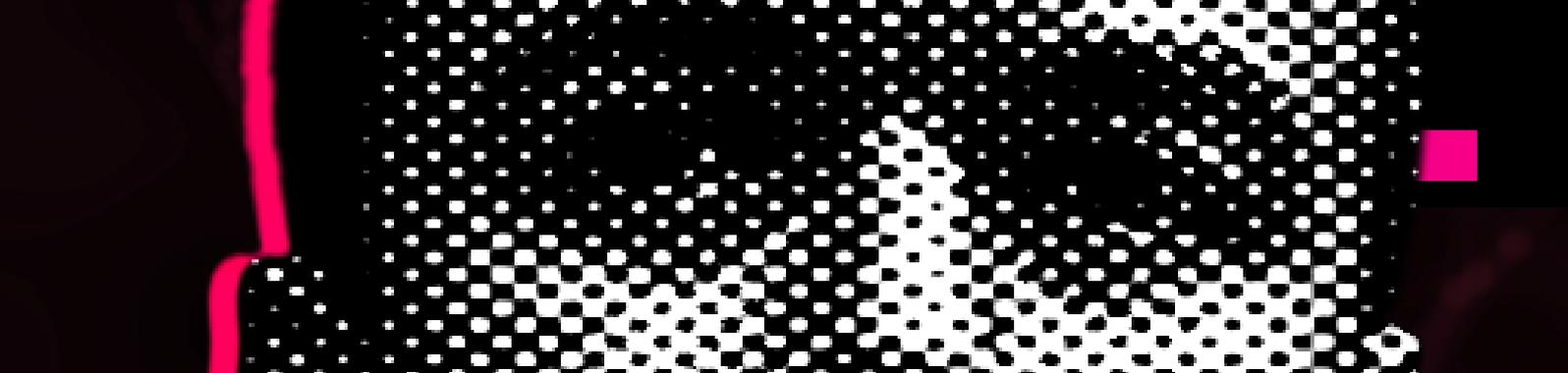


Ecuador se prepara para asistir a las urnas el próximo 9 de febrero de 2025 en un clima social convulsionado, signado por una crisis política, energética, climática, de seguridad y la militarización de los territorios y el uso del Estado de excepción como herramienta para intentar controlar por un lado, el crimen organizado y por el otro la protesta social. Recordemos que Daniel Noboa asumió el gobierno por un año y medio, completando el mandato inconcluso de Guillermo Lasso que disolvió la Asamblea en mayo de 2023, haciendo uso por primera vez en el país del artículo 148 de la Constitución, conocido de forma coloquial como "muerte cruzada", los hechos de corrupción y la desaprobación de su gestión de más del 80%, anticiparon su salida.



Desde que asumió Noboa, dictó al menos ocho estados de excepción, precipitados por los motines en las prisiones del país y por el atentado narcoterrorista efectuado en un canal de televisión nacional, en enero de 2024, que desató una crisis de seguridad.

A raíz de eso, el mandatario firmó el decreto ejecutivo 111 y declaró la existencia de un conflicto armado interno. Ordenó la movilización militar hacia las calles y ubicó como objetivo de esa guerra a 22 bandas criminales, que calificó como terroristas.



En ese contexto el gobierno ecuatoriano recibió la visita del Comando Sur, que entregó una donación de 1 millón de dólares destinados al equipamiento de las fuerzas de seguridad y acordó con el gobierno un plan de seguridad con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones en 2023, además de los marcos necesarios para que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan operar en territorio ecuatoriano. La situación empeoró con disturbios carcelarios violentos y la propuesta en febrero de un aumento del IVA al 15%, para financiar el “combate contra el terrorismo”. La medida enfrentó una resistencia significativa en la Asamblea Nacional y desencadenó manifestaciones masivas.

El último estado de excepción, dictado por el presidente en octubre está focalizado. Incluyendo esta vez a Quito. Según el Decreto Ejecutivo 410, dura 60 días y rige para seis provincias y dos cantones: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro; el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha y, el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Las movilizaciones han sido una respuesta generalizada y variada contra las políticas del presidente Noboa. Estas medidas de seguridad, incluyendo el estado de excepción y la ayuda militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, generaron controversia y preocupación por los derechos humanos.

Sin embargo, tales medidas, no fueron suficientes, para reducir la tendencia. Desde marzo de 2024, las muertes violentas empezaron a subir nuevamente. Incluso, en agosto de 2024, hubo 606 muertes violentas y en octubre de 2024, se cometieron 679 asesinatos, con lo que se convirtió en el mes más violento de 2024. El incremento, con relación a febrero de 2024 (el mejor mes), fue del 82,04%. Según la encuestadora Comunicaliza, en ese mismo octubre, la aprobación de Noboa cayó al 45,9%. Aunque, para esta época, la principal preocupación del país -al igual que en 2023- ya no era la seguridad, sino la crisis energética. Entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, durante el Gobierno de Noboa, se cometieron 6.277 muertes violentas. Es decir, se asesinó a 18 personas cada día, en promedio.

A la crisis de seguridad se agregó una crisis política, causada por el conflicto con la vicepresidenta, Verónica Abad, quien, tras ser suspendida por el gobierno en su cargo y reemplazada por Sariha Moya, en noviembre, realizó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano. La Asamblea Nacional ecuatoriana, también se posicionó en contra y Noboa fue denunciado por violencia política de género por iniciativa de la diputada María Luisa Coello, candidata vicepresidencial del movimiento Democracia SI. En este contexto se desarrolla el proceso electoral para las elecciones presidenciales en el 2025 que, tras los procesos de democracia interna ya celebrados, constan ante el CNE 16 binomios, de los cuales, solo dos están liderados por mujeres.

Los binomios inscritos fueron:

Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela, de CREO
Daniel Noboa y María José Pinto, ADN
Jimmy Jairala y Lucía Vallecilla, de Centro Democrático
Andrea González y Galo Moncayo, de Partido Sociedad Patriótica
Jorge Escala y Pacha Terán, de Unidad Popular
Pedro Granja y Verónica Silva, de Partido Socialista Ecuatoriano
Luisa González y Galo Borja, de Revolución Ciudadana
Jan Topic y Mishelle Calvache, de SUMA
Iván Saquicela y María Luisa Coello, de Democracia Sí
Henry Cucalón y Fernanda Larrea, de Construye
Juan Iván Cueva y Cristina Reyes, de Movimiento Amigo
Carlos Rabascall y María Alejandra Rivas, por Izquierda Democrática
Henry Cucalón y Carla Larrea, Construye
Henry Kronfle y Dallyana Passailaigue, por el Partido Social Cristiano (PSC)
Leonidas Iza y Katuska Molina, Pachakituk
Luis Felipe Tilleria y Karla Rosero, Avanza



DEMOCRACIA RESTRINGIDA

En abril de 2024 se dio el inédito caso de la violación de las normas diplomáticas dispuestas por el gobierno ecuatoriano. El asalto a la embajada de México en Quito y secuestro del refugiado y ex vicepresidente Jorge Glas se presenta como otro capítulo en un continuo de ruptura de garantías que se observa en el país.



Ecuavisa Noticias ✓

@EcuavisaInforma



🔊 En la tarde del 21 de noviembre, poco antes del inicio de las protestas sociales en contra del presidente Noboa, los efectivos policiales, militares y agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, incrementaron las medidas de seguridad para evitar desmanes en el Centro Histórico de #Quito. 🖱️ bit.ly/3YWSidD



Ecuavisa Noticias ✓

@EcuavisaInforma



● **#AHORA** | La noche de este viernes 5 de abril, la Policía Nacional entró con carros blindados a la embajada de México en Quito. Roberto Canseco, encargado como embajador de ese país en Ecuador, se enfrentó a los uniformados y confirma su ingreso a las instalaciones.

La influencia creciente del Comando Sur de Estados Unidos, manifestada a través de acuerdos militares como el memorando de entendimiento firmado en 2024, refleja una estrategia más amplia de control regional bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El clima de violencia y de control al que se encuentra sometida la población restringe la participación política. El temor a represalias es palpable entre quienes se oponen al gobierno. Constantemente los candidatos presidenciales opositores sufren ataques o atentados que buscan acabar con su vida. En razón de estos acontecimientos se destinaron 288 efectivos para brindar la seguridad de los binomios presidenciales que participarán en las elecciones del 9 de febrero de 2025.

La constante militarización y los estados de excepción han creado un ambiente de miedo e incertidumbre que obliga a preguntarse por las garantías democráticas para el proceso electoral de febrero de 2025.

Es en este marco en el que las organizaciones políticas ecuatorianas tienen la clave para la construcción de alianzas que permitan desplazar del poder un gobierno que no ha hecho más que profundizar la desigualdad en un clima de violencia y represión.

HONDURAS:

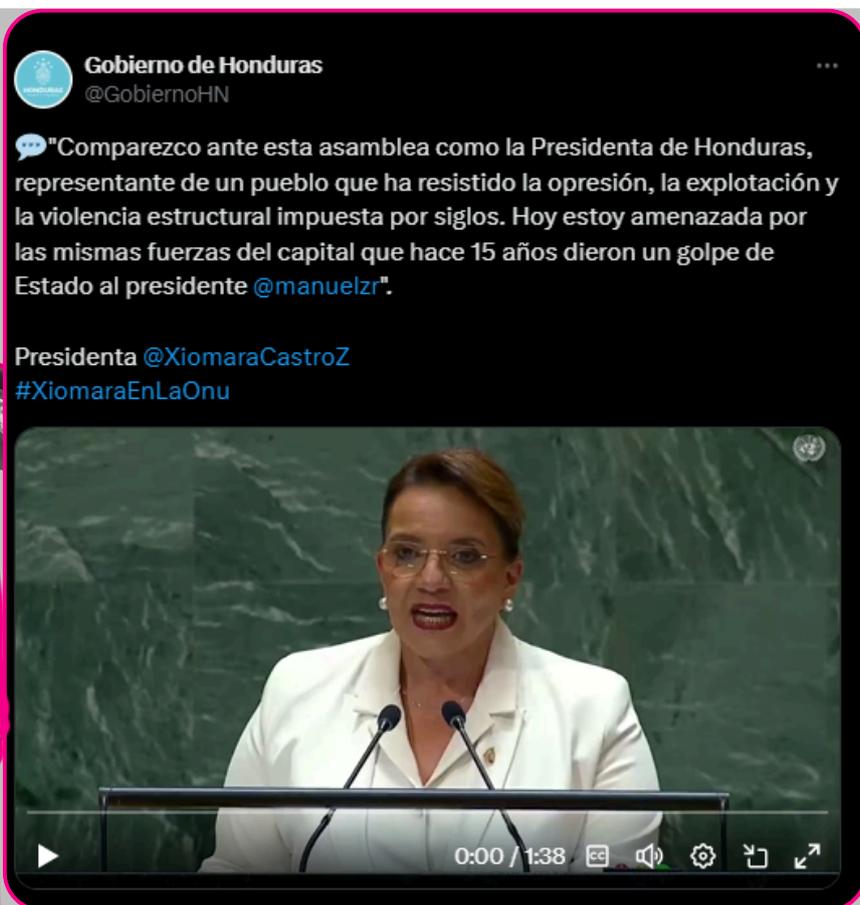
LAS FUERZAS NEOCONSERVADORAS AL ACECHO



Desde la llegada de Xiomara Castro al poder en 2021, la República de Honduras ha experimentado una profunda reconfiguración política y social que busca apartarse de las políticas neoliberales que caracterizaron a los gobiernos anteriores. El 30 de noviembre de 2025 se disputará el destino de los más de 10 millones de habitantes de un país que posee importancia estratégica por su salida a los dos océanos y por su posición privilegiada en América Central y Caribe. El escenario electoral comienza a configurarse bajo una fuerte presión externa, incluyendo denuncias de amenazas de 'golpe de Estado' por cambios estructurales impulsados en el gobierno de Castro.

«Estoy amenazada por las mismas fuerzas que hace 15 años dieron un golpe de Estado contra Manuel Zelaya; esta conspiración la denuncié en las calles el 14 de septiembre», indicó Castro. Amenazan porque he impulsado cambios estructurales y he denunciado el régimen tributario que alimenta a poderosos y explota a pobres», dijo la presidenta durante su discurso ante la 79 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, realizado en septiembre.

XIOMARA CASTRO



En Noviembre el país inicio el proceso de cara a las elecciones con la inscripción de candidatos para las elecciones internas de marzo, que definirán las nominaciones para los comicios generales del 30 de noviembre de 2025. Tres partidos principales presentaron sus aspirantes: los tradicionales Liberal y Nacional, ambos de tendencia derechista, y el gobernante Libertad y Refundación (Libre), de izquierda. Los restantes 11 partidos minoritarios buscarán candidaturas únicas o formar coaliciones pero no participarán de las internas de marzo.

El partido Libre, surgido luego del golpe de estado de 2009, presenta dos candidatos presidenciales: Rixi Moncada, actual ministra de Defensa y ex titular de Finanzas durante el gobierno de Xiomara Castro, y Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional.

Por el Partido Nacional compiten cuatro aspirantes: Ana García, ex primera dama y esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente cumpliendo una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico; el exalcalde capitalino Nasry Asfura, el diputado Jorge Zelaya y el abogado Carlos Portillo.

El Partido Liberal, fundado en 1891, presentó cuatro candidatos: Salvador Nasralla, antiguo aliado de Libre, los diputados Maribel Espinoza y Jorge Cáliz, y el dirigente Luis Zelaya, representando a sus cinco movimientos internos.

En su avanzada dentro de la disputa de poder estadounidense, las fuerzas neoconservadoras ven en las próximas elecciones una oportunidad para disputar el control geopolítico en la región. Con el avance del narcotráfico y el fortalecimiento del “estado paralelo”, estos actores buscan desestabilizar el proyecto popular, y revertir los avances hacia una mayor autonomía y soberanía que viene transitando Honduras. En este contexto, el Comando Sur de EE.UU. sigue siendo una presencia significativa. Sin ir más lejos, el 18 de junio pasado, Xiomara Castro se reunió con la general Laura Richardson para discutir comercio, migración, seguridad y el proyecto del tren interoceánico.



Las elecciones de 2025 en Honduras no solo definirán el futuro político del país, sino que también serán un campo de batalla crucial en la lucha entre dos visiones opuestas de desarrollo y soberanía en América Latina, que se disputa multidimensionalmente. El desenlace de esta contienda dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno de Xiomara Castro para desmontar las presiones externas, apoyado en la fuerza popular que construyó el amplio movimiento de resistencia que lo llevó al poder y consolidar su proyecto de transformación social frente a las estrategias de intervención y desestabilización, siempre renovadas, del imperialismo angloamericano.

BOLIVIA:

CRISIS INTERNA DEL MAS Y PUGNA ENTRE FUERZAS SOCIALES



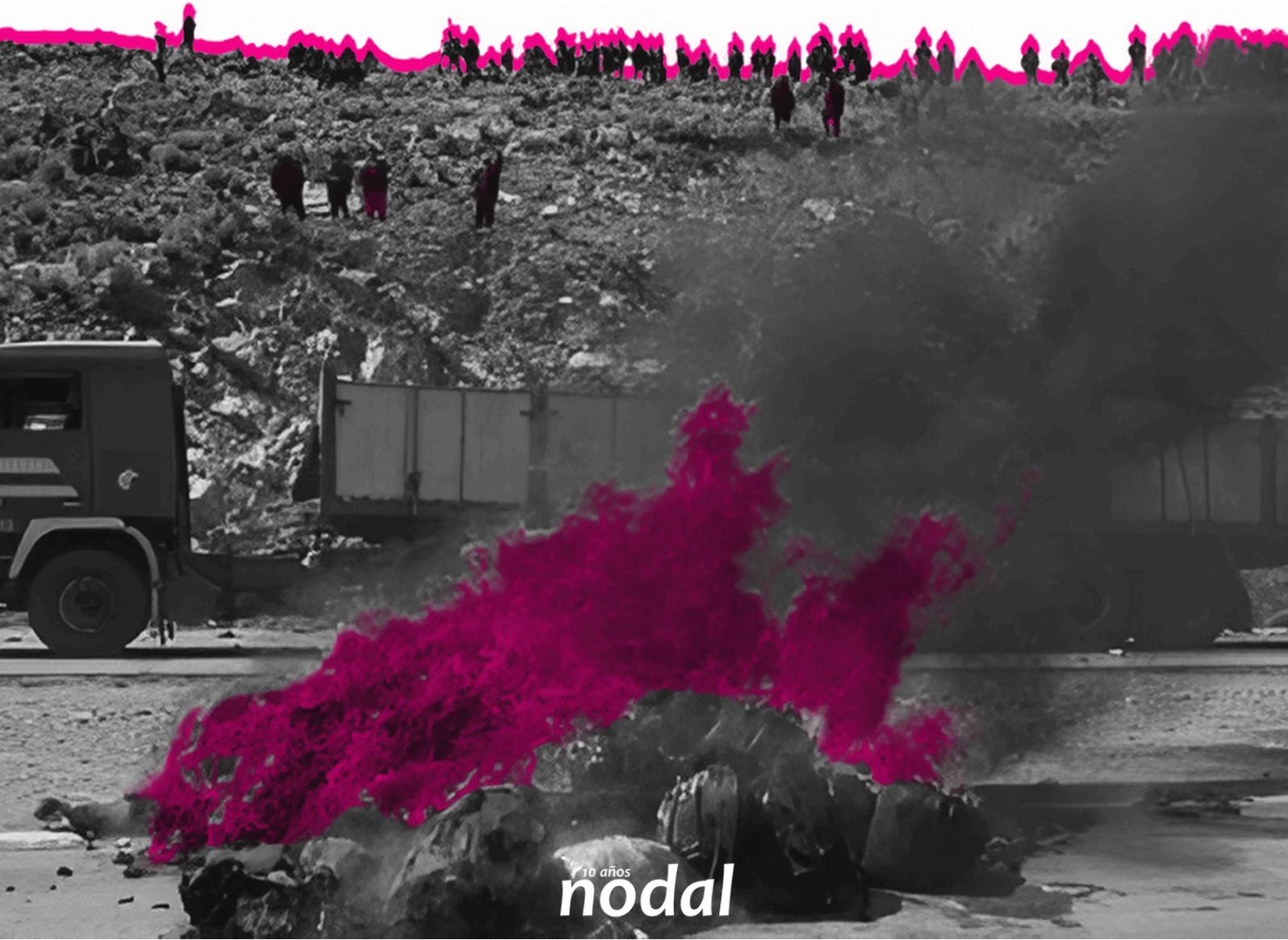
La tensión política en Bolivia, que deberá afrontar elecciones en agosto de 2025 ha ido en aumento durante este año alcanzando un punto cúlmine el 27 de octubre, cuando el ex presidente Evo Morales sufrió un atentado contra su vida, por parte de miembros de un comando de la policía que intentó detener el vehículo en el que se desplazaba.

El hecho, que dejó herido al chofer de Morales, se produjo en un contexto de creciente agresión hacia su figura, en el marco de una disputa entre él y Luis Arce por liderar la representación del MAS, y luego de la llamada marcha para Salvar la Patria que Evo Morales emprendió en septiembre junto con las organizaciones campesinas que lo acompañan, con un pliego de demandas por la situación económica del país, en franco deterioro y en repudio a miembros de su gabinete.

A inicios de 2024 el gobierno desplegó una serie de acciones destinadas a inhabilitar a Evo Morales, involucrando en la jugada a actores del entramado judicial, político, mediático, económico y militar de Bolivia.

En enero, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia que ratificaba la imposibilidad de un presidente o vicepresidente de asumir el gobierno por tercera vez, como sería el caso de Evo Morales. Paralelamente, los magistrados del TCP –con acuerdo del Ejecutivo– habían extendido su mandato de manera inconstitucional, al posponer repetidamente las elecciones mediante las cuales deberían renovarse sus cargos, ignorando las numerosas manifestaciones que exigían la realización inmediata de esos comicios, tal como lo estipula la Constitución.





En medio de este proceso, el pasado 26 de junio, una facción de las Fuerzas Armadas intentó un golpe militar fallido en Bolivia, encabezado por el general Juan José Zúñiga, jefe del Ejército boliviano. Zúñiga llegó a la Plaza Murillo, el corazón del poder político en La Paz, acompañado de soldados y vehículos blindados, con el objetivo de tomar la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno. Exigía la renuncia del gabinete del presidente Luis Arce, la inhabilitación política de todos los expresidentes —en especial Evo Morales— y la liberación de figuras que él consideraba “presos políticos”, como la ex presidenta de facto Jeanine Áñez y el líder cruceño y golpista Luis Fernando Camacho. El presidente Arce confrontó a Zúñiga, le ordenó la retirada y procedió a destituirlo junto a otros jefes militares involucrados. Poco después, Zúñiga fue arrestado y acusó al propio Arce, un amigo de colegio con quien solía jugar básquet, de haber “orquestado” el incidente para mejorar su popularidad. El 15 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó la ley de suspensión de las elecciones primarias de candidatos con los votos de arcistas y opositores, y sin el apoyo del evismo, eliminando así la posibilidad de resolver las tensiones entre ambos líderes mediante elección democrática al interior del MAS-IPSP. Así es como en medio de una fractura ya expuesta el mandatario inició el bloqueo de caminos y “La marcha para salvar la patria” en septiembre.

La problemática de la escasez de combustible, la creciente deuda externa, el aumento de la inflación y la alineación del presidente Arce con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), fue interpretado como un alejamiento al proyecto de cambio que caracteriza al MAS-IPSP y un acercamiento a políticas de tinte neoliberal.

A fines de noviembre el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconocieron el Congreso del MAS arcista, realizado en mayo en la ciudad de El Alto, registrando a Grover García como presidente del MAS.

El 1 de diciembre el expresidente Evo Morales declaró que será candidato presidencial con la sigla del partido azul o sin ella. “Entonces la historia se repite y sólo quiero decir a los compañeros que están esperando qué hará el MAS-IPSP, ya he consultado telefónicamente, mañana se consolidará, nosotros vamos a participar a las elecciones nacionales con MAS-IPSP, si ganamos está batalla jurídica, si se reconoce la normas y sino, igual, será con sigla prestada, será regalada, eso no es problema”, indicó Morales en su programa en Radio Kawsachun Coca. La cronología de hechos ilustra cómo las tensiones internas dentro del oficialismo en Bolivia han derivado en una ruptura profunda. En este contexto, el control del aparato estatal ha quedado, mayoritariamente, en manos



de una pequeña burguesía urbana que, sin los beneficios del poder institucional, difícilmente hubiera alcanzado el gobierno. Del otro lado, la base indígena y campesina, en su mayoría alineada con Evo Morales, impulsa un intento por reencauzar el “proceso de cambio”.

Así, más allá de los personalismos — con sus aciertos o sus errores—, este conflicto refleja una disputa de proyectos políticos, donde actores tanto partidarios como extrapartidarios —incluyendo la oposición— se alinean, en el conflicto en uno de los dos bandos de la disputa.

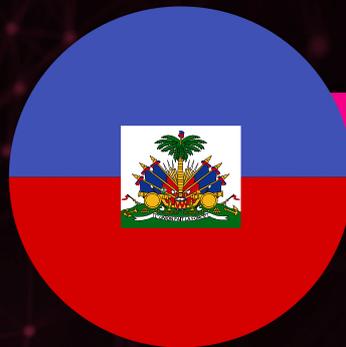
Aún con contradicciones el evismo representa la visión política principal de una fuerza social, de base indígena-campesina con alianzas con sectores obreros y profesionales de la ciudad, que promueve la soberanía sobre los recursos naturales, el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, el carácter plurinacional del Estado, y un modelo de desarrollo que se aleja de la dependencia en inversiones extranjeras dominantes.

En esos términos, la neutralización de Morales y su proyecto constituye, en última instancia, un intento por suprimir estos ideales, asegurando el control sobre el litio y otros recursos estratégicos a una tecnocracia alineada con intereses internacionales y sectores corporativos. En esta línea, los destinos de Ecuador, Bolivia, Honduras, y Chile en 2025 son estratégicos para saber cómo se continuará reconfigurando el

panorama regional. Los resultados de lo procesos electorales que se dirimieron en 2024, expresan la polarización de las escena política latinoamericana y permiten organizar un mapa regional en el que es posible ubicar, por un lado, un conjunto de gobiernos Revolucionarios como Venezuela, Cuba, Nicaragua y progresistas entre los que se cuentan Honduras, Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, México y ahora, Uruguay. Los altos niveles de conflictividad producidos durante el proceso electoral venezolano, han mostrado ciertas divergencias en lo que en otra época se hubiera nombrado como un bloque integrado. Sin embargo es posible decir que cada uno de estos gobiernos comulga con ideas de justicia social, distribución de ingresos e intentos de mantener grados de autonomía para decidir sobre los recursos propios. Por otro lado, se observa también la consolidación de un eje que responde al modelo neo reaccionario, conservador en lo político y liberal en lo económico, con implementación de políticas de securitización como revestimiento de un modelo económico digital y financiero que conquista electorados hastiados y devuelve a cambio más pobreza, exclusión, absolutismo, vigilancia y control. En ese conjunto de países se destacan Argentina, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú y Paraguay.

HAÍ:

INJERENCIA EXTERNA Y ESTADO FALLIDO



El pueblo haitiano deberá asistir a las urnas en noviembre de 2025, en medio de un clima social caótico, ya que el país atraviesa una crisis social y humanitaria, que la intervención de tropas extranjeras para la pacificación de las bandas que controlan el territorio no ha hecho más que agudizar.

El 11 de marzo de 2024 el primer ministro ultraderechista Ariel Henry, quien se había negado a llamar elecciones durante más de año, renunció luego de una ola de protestas y de presiones internacionales, incluidas las de Antony Blinken, jefe de departamento de Estado de EEUU y la Caricom, bloque que aglutina a las naciones del Caribe.

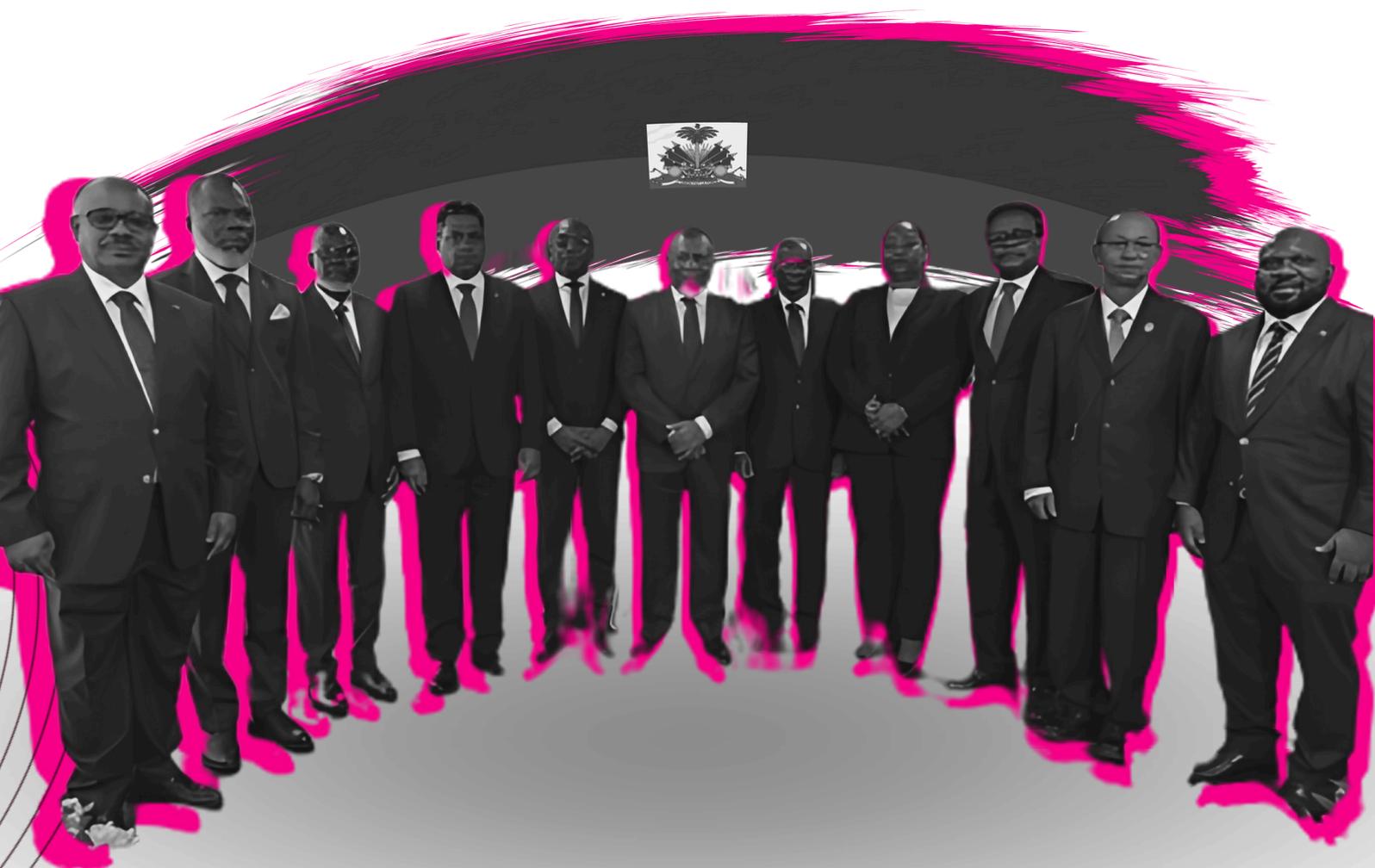
Hacía más de un año que la población exigía su renuncia. Durante ese mes existieron un conjunto de ataques coordinados por parte de organizaciones armadas a instituciones gubernamentales. Intentaron tirar las puertas del Palacio Nacional y prender fuego a la sede del Ministerio del Interior. Los días siguientes la situación de violencia se agudizó con la toma de dos prisiones, en la que se dió la liberación de más de 3,600 privados de libertad y un intento de asalto al aeropuerto internacional Toussaint Louverture. El país se encontraba en enero sin un Parlamento en funciones y la Corte Suprema, que había sido tomada, estaba inoperante.



Henry fue el sucesor de Jovenel Moïse, ex presidente del mismo partido de ultraderecha (PHTK), asesinado en 2021 por una banda de mercenarios estadounidenses y colombianos.

En abril, se conformó el Consejo de Transición encargado de elegir al próximo primer ministro y al gabinete de Haití, con cerca del 80% del territorio de la Capital, Puerto Príncipe controlada por bandas, según indicaban informes del International Crisis Group. De las organizaciones armadas que operan en el territorio haitiano la más conocida es el G9, liderada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, quien se manifestó en contra de una intervención extranjera y se presentó al frente de una coalición armada de hombres en “batalla para liberar (al país) de las garras de los políticos tradicionales y los oligarcas corruptos”. Chérizier pidió a la comunidad internacional una oportunidad para que el pueblo haitiano pueda tomar sus propias decisiones.

El Consejo Presidencial Transitorio se conformó con nueve miembros—siete con derecho a voto y dos observadores— representantes de los principales partidos políticos, la sociedad civil y el sector privado. Se acordó además el inicio de una transición presidencial, comandada por la Comunidad del Caribe (CARICOM) que se reunió en Jamaica, con representantes de Estados Unidos, Francia, Canadá y la ONU.



En junio fue instituido como primer Ministro Garry Conille, quien habilitó el ingreso al país de una Misión Militar Multinacional extranjera comandada por Kenia y respaldada por la Organización de Naciones Unidas. Así, ocho meses después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordará su despliegue, 400 policías de Kenia aterrizaron en junio en Haití. El primer contingente que llegó a la isla caribeña, está compuesto de un total de mil policías kenianos, cuestionados en su propio país por la brutalidad de sus actos y por abusos contra los derechos humanos.

El despliegue de las tropas extranjeras- ampliamente rechazado por la población, bajo el recuerdo de intervenciones anteriores- no logró mejorar la situación.

En octubre un informe publicado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país indicó que al menos 1.223 personas murieron y 522 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año como consecuencia de la violencia y la lucha contra las bandas.

En noviembre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que en apenas cuatro días, más de 20000 personas fueron desplazadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití. De ellas, más de 17000 fueron refugiadas en 15 campamentos improvisados, ante la escalada de violencia y el enfrentamiento de bandas armadas con la policía y miembros de la Misión.

La crisis interrumpió las cadenas de suministro esenciales y aisló la ciudad, agravando una ya difícil situación humanitaria. La organización advirtió que este desplazamiento fue el más significativo desde agosto de 2023. Mientras los programas de respuesta humanitaria de la ONU, valorados en 674 millones de dólares, sólo habían recibido apenas el 42% de los fondos necesarios.

Según el comunicado de la OIM, “el tráfico aéreo permanece suspendido tras disparos selectivos contra tres aviones comerciales sobre Puerto Príncipe. Además, las restricciones de acceso al principal puerto marítimo y la inseguridad en carreteras controladas por grupos armados han paralizado casi por completo el área metropolitana”.

En noviembre Conille fue destituido por el Consejo, por haberse tomado atribuciones diplomáticas y tomar decisiones sin consultar al Consejo. En su lugar asumió el empresario Alix Didier Fils-Aimé como nuevo primer ministro.





A lo largo de su historia, el pueblo haitiano ha sido pionero en la lucha por la libertad. En 1804, lograron la primera revolución antiesclavista exitosa en la región. En 2004, fue destituido Jean Bertrand Aristide, el presidente que se atrevió a exigir a Francia una reparación económica por los tributos que el imperio francés obligó a pagar por años al pueblo haitiano, luego de haber vencido a su ejército en la gesta independentista.

La inestabilidad política en Haití fue promovida y aprovechada por los sucesivos gobiernos estadounidenses por su ventajosa posición geográfica entre el mar caribe y el océano atlántico, cercana a Cuba, México, Colombia y Venezuela, para establecer instalaciones militares y ejercer influencia en toda el área.

En este escenario de crisis, intervención e instalación de un modelo de securitización, en Haití existe sin embargo una fuerza social popular que reclama la apertura institucional y garantías democráticas, para la instauración de un gobierno nacional que desarrolle grados de autonomía. Las próximas elecciones a desarrollarse en este contexto, serán las primeras desde el año 2016 ¿Logrará canalizarse esto en una vía institucional?

Mg. Paula Giménez
Directora de NODAL

Mg. Lucas Aguilera
Coordinador de investigación

Solange Martínez
Coordinadora Anuario América Latina y el Caribe 2024

Elisa García
Editora

Jimena Montoya | Luciana Jouli | Maximiliano Londero
Coordinadores de Redacción

Alfio Finola | Noelia Naranjo | Carolina Sturniolo |
Bruno Ceschin | Diego Lorca | Seyla Riera Bauer |
Luz Eggel | Marcos Llul | Aixa Reyes
Redactores

@InfoNodal



10 años
nodal

Noticias de América Latina y el Caribe